

LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA

ARACELI MANGAS MARTÍN*

“Lo primero que se necesita para tratar de asuntos científicos, cuando no nos impulsa la misión de la enseñanza, es tener alguna observación nueva o ideal útil que comunicar a los demás. Nada más ridículo que la pretensión de escribir sin poder aportar a la cuestión ningún positivo esclarecimiento, sin otro estímulo que lucir imaginación calenturienta o hacer gala de erudición pedantesca con datos tomados de segunda o tercera mano”.

(Santiago RAMÓN Y CAJAL,

Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la voluntad)

I. EL SISTEMA ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN Y SU RETROALIMENTACIÓN

Probablemente haya un antes y un después en la evaluación de la investigación en España tras el Real Decreto 1086/1989¹ que introdujo un complemento económico en el régimen retributivo del profesorado universitario y atribuyó a una Comisión Nacional (con voz y voto de todas las Comunidades Autónomas) la competencia de organizar el sistema de evaluación de la actividad investigadora.

Era un complemento de productividad, sí, pero destinado a incentivar y controlar la actividad investigadora y su mejor difusión mediante un proceso evaluador que erigía una Comisión

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)² encargada de aprobar los criterios de evaluación³ y la conformación de los comités asesores –los cuales realizan y deciden materialmente las evaluaciones de los sexenios⁴–. Los comités hacen su trabajo con absoluta independencia de la propia Comisión Nacional.

² Sobre su nueva composición, ver Orden CIN/3040/2008, BOE de 28 de octubre de 2008 (12 miembros designados por el Ministerio y 17 por las Comunidades Autónomas, todos con al menos tres tramos consecutivos reconocidos); su Reglamento de Funcionamiento interno en el BOE de 15 de octubre de 2005 (Orden ECI/3184/2005). La CNEAI ha estado dominada por científicos básicos y experimentales hasta 2007 cuando entraron por vez primera un jurista y un ingeniero. Al ampliarse en 2008 de 5 a 12 miembros, se abrió a campos como Arquitectura, Economía, Filología e Historia.

³ La evaluación del profesorado se hace mediante un sistema aceptablemente transparente (con criterios básicos estables desde 1994 –y otros específicos adaptados en una Resolución anual–). Los comités son renovados cada dos años con personas que tienen, al menos, tres evaluaciones positivas y consecutivas, garantizando *a priori* un nivel igual o superior que los posibles evaluados [Orden Ministerial (MEC) de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora, BOE de 3 de diciembre de 1994].

⁴ Los comités asesores y la división de los campos científicos y las áreas de conocimiento a ellos asignados se regulan en la Orden Ministerial (MEC) de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora, BOE de 3 de diciembre de 1994. El campo 6 (ingenierías) ha sido subdividido en tres subcampos. La Resolución correspondiente a 2011 incorporó un campo 0 de “transferencia de conocimiento” abierto y complementario respecto de los campos originales.

* Directora del Departamento de Derecho Público y Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca. Miembro del Comité Asesor 9 (Derecho) de 2004 a 2006 (Presidenta en 2005 y 2006) y miembro de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de febrero de 2007 a abril de 2011. Desde los años ochenta, evaluadora de proyectos de investigación en Programas nacionales (ANEP), en el Ministerio y en Agencias autonómicas, así como en diversas Fundaciones privadas que financian proyectos. Colabora como “experta” en ANECA y ha sido miembro del comité de expertos en evaluación de revistas españolas en FECYT.

¹ Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario (BOE de 9 de septiembre de 1989).



Universidad de Alcalá.

Aunque ha habido críticas bien fundadas sobre criterios concretos⁵, el sexenio es el único parámetro compartido por todas las universidades españolas, públicas y privadas, en el marco de una ilimitada autonomía universitaria, con universidades *de facto* encerradas con su profesorado autóctono.

Hay que reconocer a favor del profesorado universitario español el mérito de la evaluación periódica de su productividad, pues en el ámbito de la función pública en España no conozco ningún sistema de control de la calidad de la actividad semejante al que se practica al profesorado universitario. Ninguno de los cuerpos de las Administraciones públicas (inspectores, Abogados del Estado, jueces, técnicos de administración civil, técnicos comerciales, diplomáticos, etc.), ninguno se somete a controles de productividad y calidad.

II. EFECTOS DE LOS SEXENIOS EN LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

En muchos campos científicos, incluido el Derecho, el sistema de los sexenios ha enviado mensajes o pautas de trabajo a la

comunidad científica española para hacerla más competitiva e internacional, promocionando buenas prácticas editoriales en revistas y empresas editoriales o en los servicios de publicaciones universitarios (sistema de *peer review* o revisores con sistema ciego o doble ciego). La práctica de la evaluación con sus mensajes, tanto en los criterios generales como en los específicos anuales, ha condicionando y reorientando la investigación científica. Se establecieron nuevas reglas de juego y la comunidad universitaria se adaptó a las mismas.

Antes de 1989 era muy bajo el volumen de publicaciones. Cier to que publicación no es igual o sinónimo de investigación. En todos los campos está demostrado que hizo aumentar la producción académica en términos cuantitativos y la condicionó cualitativamente⁶, si bien en el campo del Derecho y Humanidades, los efectos fueron algo menores al no adaptarse bien los métodos de evaluación importados de las ciencias básicas y experimentales.

pero en su cómputo global y acumulado (casi 500 expedientes anuales cada uno con seis publicaciones) son “errores marginales” aunque siempre muy lamentables. En el Comité 9 (Derecho) se ha implantado desde 2005 la evaluación doble y separada de cada expediente junto con la decisión presencial y colegiada.

⁶ Vid. J. REY, M. J. MARTÍN SEMPÉR, L. PLAZA, J. J. IBÁÑEZ, I. MÉNDEZ, “Changes on publishing behavior in response to research policy”, *Scientometrics* 1998 JAN-FEB 41 (1-2), 101-111; E. JIMÉNEZ-CONTRERAS, F. DE MOYA ANEGÓN, y E. DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, “The evolution of research activity in Spain. The impact

⁵ Claro que los Comités asesores a veces incurren en errores atribuyendo sexenios de forma muy laxa o no reconociendo aportaciones dignas o de calidad,

Lo que es seguro es que en España aprendemos rápido: que hay que publicar para tener sexenios, pues se publica y se inició en todos los campos la obsesión por publicar y, más grave aún si cabe, por “re-publicar” abonando de paso el terreno para inflar los currículos para proyectos y plazas de profesorado... Pero, de verdad, ¿aumentó la calidad en todos los campos? El aumento cuantitativo no garantiza la calidad.

En mi opinión, ser “ágrafo” es una patología de pronóstico reservado. No obstante, el mayor daño a toda Ciencia y a la sociedad en su conjunto es padecer la letal enfermedad de la “grafomanía”. En el campo del Derecho se multiplicaron las revistas, así como los libros colectivos en los que se volcaron las tesis y monografías parceladas. Como decía Ihering (Jhering) en una irónica obra “si queremos mejorar el estado de las cosas, deberemos arremeter contra la grafomanía”⁷. Sexenios, proyectos financiados y el sistema de acreditación han contagiado y generalizado la grafomanía. Los sexenios han sido determinantes de los currículos universitarios; también los proyecto financiados y ellos han retroalimentado las evaluaciones de ANECA.

III. ¿SEXENIOS DE SUFICIENCIA O DE EXCELENCIA?

El reconocimiento de un tramo no tiene más significado que identificar un nivel mínimo aceptable de trabajo con apariencia investigadora del profesorado. Buena prueba es que el 72% de profesorado universitario español que lo solicita lo obtiene, mientras que el 28% restante incluye tanto a los no presentados como a los “suspensos”⁸. Nunca fue objetivo de la evaluación por tramos o sexenios la investigación de excelencia. Se trataba de premiar la formal actividad investigadora frente a la desidia o la creencia de que el tiempo era eterno o se vinculaba la investigación a la tesis y a las fases previas a los concursos-oposición.

Los tramos nunca han tenido por objetivo discernir la excelencia o la alta calidad del resto de la investigación; ni tan siquiera la acumulación del máximo de los cinco tramos debe ser considerado como un indicio de excelencia; a lo sumo de constancia. Como con frecuencia se dice en los comités, identifica a profesores con “oficio”. Nada más. Por tanto, nunca debieron ser extrapolados sus resultados de cara a la acreditación del profesorado dañando a los dos sistemas de evaluación.

of the National Commission for the Evaluation of Research Activity (CNEAI)”, en *Research Policy* 32 (2003), pp. 123-142. Estos autores afirman que supuso la apertura de los científicos hacia revistas internacionales con el consiguiente declive de las revistas nacionales y la adaptación de los trabajos hacia los criterios de evaluación de la CNEAI; también puede verse “Impact-factor rewards affect Spanish research”, *Nature*, vol. 417, 27 de junio de 2002 y en www.nature.com/nature.

⁷ R. VON JHERING, *Bromas y veras en la jurisprudencia*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1974, p. 116.

⁸ Ver tabla 4 en <http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/2005-resultados-porcentaje-exito-universidad-sin-teu.pdf?documentId=0901e72b8008d9fd>, que cubre “Resultados por Campos de porcentajes de éxito (excluidos los profesores Titulares de Escuela Universitaria) 1989-2005 (Total), de las Universidades públicas”. En la Tabla 6 (15 de 18), se pueden observar desglosados por Áreas los resultados para el mismo periodo globalizado en el Campo del Derecho (campo 11).

Es una lástima que desde 2006 no haya datos detallados y comparables en la Web de la CNEAI a los que se publicaron hasta 2005 y los que se incluyeron de 2006 y 2007 son parciales (no incluye datos ni porcentajes de aprobados, no presentados, suspensos, género, universidades, áreas), o se oculten totalmente los de 2008 y los de 2009 sean un amasijo incomprensible.

El problema de los sexenios es que en los campos científicos “duros” (1 a 5, quizás en el 6) los criterios de aplicación se han quedado obsoletos hace muchos años y es casi automática su concesión (además del distorsionante efecto multiplicador de los trabajos publicados en grupo). Al haber banalizado los sexenios (ver resultados a fecha 2007 en nota 12) los colegas de esos campos y el propio Ministerio han tratado de crear alternativas que distingan a unos científicos de otros, ya sea con el sexenio de “transferencia de conocimiento” desde la evaluación de 2010, ya sea con el proyectado sexenio de excelencia o más exactamente con el Colegio de Investigadores Distinguidos –CID– que la crisis ha apartado.

IV. EVOLUCIÓN DE LOS EFECTOS ACADÉMICOS DE LOS SEXENIOS

De incentivo para fomentar la actividad investigadora pasó, a partir del 2000, a ser umbral mínimo exigible por algunas Universidades para dirigir la tesis doctoral y, poco después, por la legislación estatal y todas las Universidades como requisito umbral para poder formar parte de tribunales de habilitación a Cátedras (dos tramos), más tarde tres tramos para poder formar parte de las Comisiones de acreditación de ANECA (para Cátedras) y de sus grupos de expertos. Esta alta cotización de los sexenios no le perjudicó ni distorsionó el sistema de evaluación de la CNEAI.

Era, además, una medida congruente, pues en el pasado ha habido catedráticos y titulares que apenas tenían investigación y juzgaban a personas con niveles de conocimiento y experiencia investigadora muy superiores a los suyos. Este nuevo requisito permite una discriminación objetiva al separar del sistema de selección del profesorado a cuantos catedráticos y titulares habían renunciado al perfil investigador, perfil que nos distingue de los niveles docentes no universitarios.

Pero por otra parte, los sexenios se han utilizado por ANECA para un fin distinto al que fueron creados. ANECA los utiliza también como criterio casi decisivo para la selección del profesorado. La acumulación de sexenios otorga *de facto* el derecho a la Cátedra. Ello ha sido una perversión dramática para las Universidades españolas y para la labor de la CNEAI: su nuevo fin puede distorsionar el primero. Un instrumento utilizado para un fin distinto (la selección del profesorado) al inicial que motivó su creación (la mera suficiencia investigadora) se pervierte y lo inutiliza. El daño ha sido inmenso para el sistema de la CNEAI creando una presión insostenible en comités que hacían una buena labor.

Los sexenios no calibran el nivel de profundidad y calidad del dominio de un área de conocimiento y, por ello, nunca debieron ser incluidos como criterio casi decisivo para evaluar las plazas de Catedrático en el sistema de ANECA. Puesto que los sexenios no reflejan necesariamente un alto rendimiento científico ni reconocimiento nacional o internacional de aportaciones, nunca debió ser tenido en cuenta como criterio que por su acumulación da prácticamente el acceso a la Cátedra.



Al establecer un sistema casi mecánico de evaluación basado en los sexenios⁹, atribuyendo a cada tramo investigador 15 puntos de forma automática, hay que reconocer que los titulares con cuatro sexenios acceden *de facto* a la Cátedra. Un Gobierno socialista ha incorporado a la Universidad española del siglo XXI el sistema de promoción utilizado por la dictadura de Franco para su ejército (los “chusqueros” o militares “de cuchara”). Como decía Ihering de las Universidades alemanas del siglo XIX, “estas sólo abren sus puertas a quien... ha hecho poner en letra de molde e imprimir algo escrito por él. El camino a la Cátedra pasa por la imprenta”¹⁰. Hoy hay obsesión por publicar lo que sea. Nadie lo va a leer¹¹. En el mundo anglosajón se sabe que hay estancias en universidades extranjeras, congresos y publicaciones para falsear e inflar los *curricula*: “write once, read never”.

Además la carrera académica se hace larga y se llega con demasiadas canas a las Cátedras; es cuestión de esperar, trabajar lo justo, publicar y “republicar”. No se valoran las grandes capacidades ni el esfuerzo intenso y profundo. Cuando se llega demasiado tarde ya no se crean grupos ni se forman nuevos docentes e investigadores. Pocos entran con dos sexenios; nadie brillante y esforzado con uno y algo más... Lo que debería importar, no es la cantidad, sino la calidad de la investigación y el método de evaluación de la ANECA sólo permite apreciar la cantidad.

El hecho de que los sexenios se sigan dando con facilidad en varios Campos (campos 1, 2 y 3, aunque también en 4 y 5) desvirtúa y deslegitima el proceso de acreditación a Cátedras basado en la acumulación de tramos investigadores¹². Sorprendentemente las ciencias básicas y experimentales los otorgan con generosidad y no practican ciertos umbrales tácitos de *encarecimiento por cada tramo nuevo* que se solicita, frente a las prácticas algo más serias y rigurosas de los subcampos de Ingenierías, las CC. Políticas-Sociología-Psicología y CC. de la Edu-

cación, Económicas, Derecho, etc., campos en los que, al menos hasta hace poco, se ha observado *una pirámide invertida y muy acentuada* reflejando cierto rigor y criterio en sus controles y encareciendo cada nuevo tramo que se solicita. Conclusión: No todos los sexenios valen lo mismo, ni en el mismo campo ni comparados entre sí, lo que distorsiona la composición de los claustros universitarios. Los sexenios no son un parámetro fiable para medir y comparar el trabajo científico de cara plazas de profesorado.

V. LA IMPORTACIÓN DE CONCEPTOS Y MÉTODOS DESDE LAS CIENCIAS BÁSICAS Y EXPERIMENTALES AL DERECHO

Los campos de las ciencias básicas y experimentales se anticiparon y consolidaron criterios y métodos de medición de los resultados investigadores. Muy posiblemente son consecuencia de las características de esas ciencias. Para ellos es habitual e imprescindible para el éxito científico conceptos como el de “grupo investigador”, *peer review*, distinguen la investigación de los llamados artículos de revisión (del estado de un ámbito o materia), los índices de impacto, los rankings de las revistas (los cuartiles o terciles, según los casos), las bases de datos de revistas, el *Journal Citations Reports* (JCR) del *Institute for Scientific Information* (ISI), valoran más las estancias “post-doc” que las predoctorales, etc.

Todo ello era absolutamente desconocido y prescindible para los juristas hasta hace bien pocos años. Si a ello añadimos que la CNEAI estuvo dominada por los científicos “de bata blanca”, la importación, sin más paliativos, de los criterios de evaluación de esas ciencias sobre las ciencias jurídicas (y las Humanidades en general) ha sido muy negativo. Las plantillas de evaluación de la ANEP se han hecho con criterios ajenos a las ciencias jurídicas

⁹ Cuando se proyectaba el actual Decreto presenté alegaciones al Secretario de Estado pues el borrador inicial otorgaba 20 puntos por sexenio y para acceder a una Cátedra bastaban 80 puntos. Había varios miles de titulares con tres o cuatro sexenios (ver nota 12). Al menos, se aceptó rebajar a 15 puntos por sexenio en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE de 6 de octubre de 2007).

¹⁰ R. VON IHERING, *Bromas y veras en la jurisprudencia*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1974, p. 117.

¹¹ Como dice un prestigioso autor, J. H. H. WEILER, estamos tan ocupados escribiendo que nadie tiene tiempo de leer a los demás (“The ‘Lisbon Urteil’ and the Fast Food Culture”, *The European Journal of International Law*, 2009, Vol. 20, núm. 3, p. 508).

¹² Poco antes de aprobarse el Real Decreto citado, en junio de 2007, había

5.083 titulares de Universidad con 3 ó más sexenios (Fuente: CNEAI) —lo que supone 45, 60 ó 75 puntos sobre 80—, desglosándose por campos de esta forma:

616 en CC Físicas y Matemáticas (campo 1);
821 en Químicas (campo 2);
415 en Biología Molecular y Celular (campo 3);
759 en Medicina (campo 4);
430 en CC. de la Naturaleza (campo 5);
306 en Ingenierías y Arquitectura (campo 6);
340 en CC Políticas, Sociología, Psicología y CC Educación (campo 7);
80 en Economía (campo 8);
137 en Derecho (campo 9);
533 en Historia y Arte (campo 10); y
555 en Filosofía, Filología y Lingüística (campo 11).

(sociales y humanas en general)¹³ y han tenido efectos perversos sobre falsos grupos y proyectos (ver *infra*).

Otro claro ejemplo es la nula o inadecuada valoración de las monografías, medio prácticamente desconocido en las ciencias experimentales¹⁴. Sin embargo, en el campo del Derecho, si es de calidad e impacto puede ser determinante de un *curriculum* académico. En la misma CNEAI vale casi igual una monografía de calidad que un artículo de revista aceptable, lo que origina interminables discusiones en los comités de ciencias jurídicas, sociales y humanas. Esto es disuasorio de la investigación de calidad; una cosa es que el sexenio refleje la suficiencia y otra que *desaliente la excelencia investigadora*.

Para paliar esta injusticia y despropósito, a las monografías *de calidad*, se les daba uno o dos puntos por encima del artículo de calidad. También hemos observado que la exigencia de cinco aportaciones, sin ponderación entre monografías y artículos o capítulos de libros, propicia la picaresca de publicar la tesis o la monografía desgajada por entregas en libros colectivos y revistas. Como no se leen los trabajos en ANECA ni en la CNEAI y el comité asesor es distinto cada dos años y no examina el *curriculum vitae* completo, en el siguiente tramo, se ensamblan como monografía –o viceversa, primero la monografía y colocar en el siguiente tramo los capítulos en libros colectivos y revistas– tratando de obtener un rendimiento *infinito*.

Estas críticas y otras a esa importación de criterios faltando al respeto de las singularidades y legítimas tradiciones de otras ciencias no son óbice para afirmar que las ciencias jurídicas y las humanidades no deben escapar a los procedimientos de evaluación más habituales, pero habrá que adaptarlos a las tradiciones de cada campo científico. No ha habido respeto para nuestro campo y ha dañado gravemente la investigación.

¹³ Igualmente plantillas para la confección de los *curricula vitae* en plataformas como *Universitas XXI* son inmanejables para los juristas (ni tan siquiera aparece el Derecho en abstracto como campo científico mientras listan centenares de especialidades experimentales).

¹⁴ En unas acreditaciones de profesorado de una Agencia regional, cuyo tribunal yo presidía, la plantilla informática única para todos los campos no permitía valorar las monografías (eran un artículo más).

VI. LA VALORACIÓN DE LAS REVISTAS JURÍDICAS: NACIONALES CON PRESTIGIO INTERNACIONAL

Otro daño colateral es la importación del concepto de revistas “internacionales” y la menor valoración de la publicación en revistas nacionales. Esa dicotomía puede ser crucial en otros campos del saber pero en Derecho no lo es. Nuestros colegas de bata blanca identifican revista de prestigio internacional con revista *extranjera* y de una forma *papanatas* infravaloran cualquier revista española de prestigio y puntúan más la publicación en cualquier revista extranjera¹⁵. Habría que recordarles una verdad de *Perogrullo*: que las revistas “extranjeras” son revistas nacionales en su respectivo país.

Claro que hay que abrirse al exterior, publicar fuera, en especial cuando se investiga en materias de unificación y armonización jurídica del derecho positivo nacional y valorar en consonancia su publicación en buenas revistas extranjeras. Es cierto que hay Áreas más “internacionalizadas” debido a su objeto de estudio tales como filosofía del derecho o derecho romano, y las de derecho positivo vivo como el derecho internacional y europeo... El derecho autonómico se quedaría sin ser investigado o evaluado correctamente si sólo dependieran de revistas extranjeras.

Todos sabemos que lo más frecuente es que se solicite un artículo a un jurista extranjero en una materia en la que ya tiene publicaciones y pueda dar cuenta del “estado del arte” de una normativa o informe de una reforma legislativa o una sentencia de impacto, todo ello a título de derecho comparado. Trabajos descriptivos o en el mejor de los casos un buen resumen de sus trabajos anteriores o su mera traducción.

En la evaluación de la investigación jurídica es improcedente atribuir, *a priori*, un especial valor a los trabajos publicados en revistas extranjeras. Las revistas extranjeras, como las nacionales, unas son de calidad y otras no o lo son de divulgación técnica. Lo que importa es que las revistas, sean nacionales o extranjeras, sean de calidad y, en su caso, de *prestigio internacional*.

La investigación jurídica de calidad se difunde preferentemente a través de revistas y publicaciones nacionales. Los “pares” de

¹⁵ Por ejemplo, el sistema “*Universitas XXI*” cataloga como publicación internacional toda revista publicada fuera de España, sin discernir su valía ni el país (que también es relevante según las especialidades). No admite considerar a revistas españolas como revistas de reconocimiento internacional.



los investigadores del derecho nacional están en las revistas nacionales.

El Derecho es un objeto de conocimiento e interés profundamente vinculado al Estado y su territorio, incluido el propio derecho internacional. A diferencia de otras ciencias, las corrientes de doctrina nacional, tanto del derecho interno como del internacional, son de gran trascendencia para el propio Estado. Así sucede en los restantes Estados europeos y del continente americano o asiático. Una parte de las revistas jurídicas tiene apoyo directo o indirecto de los Estados para fomentar corrientes nacionales y asegurar su propia influencia en los conceptos generales tan decisivos en Derecho.

El ranking del JCR para Derecho es revelador de su inutilidad para Europa y corrobora el valor puramente nacional de la investigación jurídica. Cuando la dirección de la CNEAI intentó imponerlo para medir los sexenios en todas las áreas jurídicas, les mostré que entre las 100 “mejores” revistas jurídicas para los norteamericanos, 98 eran de EEUU (algunas revistas de universidades de “aldeas” o de nivel inferior a los consultores de ayuntamientos...); sólo había una europea en el puesto 52 (iniciando el tercer cuartil) como revista de valor medio bajo (la *Common Market Law Review*, una de las “top ten” mundiales en la especialidad del Derecho Europeo...). Para la ciencia jurídica de EEUU ninguna revista científica europea, británica, francesa, alemana o italiana, de derecho civil, constitucional penal, etc. tenía más valor que sus revistas divulgativas; obviamente en el JCR no había más que revistas en lengua inglesa y publicadas en EEUU¹⁶; de mi especialidad no figuraba el *Recueil des Cours* de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ni la *Revue Générale*, ni el *British Yearbook*, ninguna...

Los responsables españoles de los sistemas de evaluación deben aprender de los americanos: las comunidades académicas jurídicas miran primero, y casi en exclusiva, a su entorno jurídico-social. Es elemental. Después, cabe difundir y competir... Las ciencias experimentales y básicas mirarán a EEUU como su referencia de quienes deban aprender, seguir y competir, pero en el mundo del Derecho y desde hace miles de años la referencia es Europa. Los responsables de los organismos estatales y vicerrectorados de investigación son incapaces de entenderlo.

VII. PLATAFORMAS Y BASES DE DATOS, ¿ÍNDICE DE CALIDAD DE UNA REVISTA Y DE SUS TRABAJOS?

En el ámbito de las ciencias experimentales se da gran importancia a las bases de datos en la que están indexadas las revistas: internacionales de la especialidad, internacionales multidisciplinarias (SCOPUS, WOS...) y nacionales de la especialidad o multidisciplinarias. Por el contrario, en el campo del Derecho no utilizamos una revista en función del número de bases de datos que las hayan incluido ni acudimos a las bases de datos para conocer la existencia de una revista ni ver su fiabilidad. Ahora estos conceptos de indexación o indización se traducen

en prácticas burocráticas complejas que se exigen a los equipos responsables de las revistas jurídicas si quieren entrar bajo el paraguas de FECYT¹⁷ (y con ello en la CNEAI) y para tener mejor valoración en las acreditaciones de ANECA.

Estas plataformas¹⁸ hacen una valoración *externa* o formal de las revistas sin entrar en contenidos: les exigen un conjunto de criterios referidos a la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica, a la calidad de sus procesos editoriales y a la calidad de su difusión medida en términos de presencia en bases de datos. Se cumplimenta una ficha formal sobre la misma con un conjunto de criterios. Sólo en alguna plataforma se exige que el 75% de los artículos sean de investigación y no mera difusión o descripción.

El criterio de la indexación es extraño y no añade calidad al trabajo del investigador ni garantiza la calidad de las revistas. No está mal que vayamos homologando las revistas científicas y aceptando cierta disciplina científica, pero no es una garantía de *calidad* de cada trabajo publicado¹⁹.

Estar en Latindex (interdisciplinar) o en DICE importa a organismos como ANECA, CNEAI, en menor medida a ANEP y, especialmente, a la FECYT. Sin embargo, para las comunidades académicas de juristas y las judiciales, las revistas jurídicas son valoradas en función de los artículos originales, bien redactados, rigurosos y profundos que publiquen. Lo que importa es el contenido de cada artículo en sí. La calidad del vino y no el odre que lo acoge ni el catálogo que lo publicita...

VIII. CRITERIOS INDICIARIOS: DATOS BIBLIOMÉTRICOS Y RANKINGS PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y DE LAS REVISTAS

Es ampliamente reconocida la falta de unanimidad en cuanto a unos métodos aceptables de evaluación de la investigación en las ciencias sociales. Ni la mera contabilidad del número de trabajos, ni el recuento de citas²⁰, ni la calidad de quien cita, ni la

¹⁷ Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (www.fecyt.es); uno de sus cometidos es la divulgación, información y medición de ciencia e innovación.

¹⁸ FECYT valora mucho la presencia de las revistas en plataformas de evaluación de revistas científicas, tales como DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. <http://dice.cindoc.csic.es/>), o MIAR para las ciencias sociales (<http://miar.ub.es/>), Econlit (para las revistas económicas, <http://www.aeaweb.org/econlit/index.php>), o Latindex, multidisciplinar para revistas iberoamericanas y para todas las áreas de conocimiento (<http://www.latindex.org>) y otras internacionales multidisciplinarias, como SCOPUS, FRANCIS Nacional de la especialidad, ISOC, etc.

¹⁹ Los criterios que exigen son formales y algunos de *perogrullo*: mención del cuerpo editorial, antigüedad, identificación de autores, entidad editorial, mención del director, url, mención de periodicidad, tabla de contenidos; resumen/abstract, palabras clave, datos sobre proceso editorial, apertura editorial, cumplimiento de la periodicidad, fechas de recepción y aceptación de originales, etc.

Latindex informa, sobre un total de 33 criterios de evaluación formales, de número de criterios cumplidos por cada revista acogida a su sistema. Pero las plataformas no *valoran* contenidos ni los *garantizan*.

²⁰ Condicionada por las adscripciones a escuelas, colegas de Facultad, intercambio de citas entre jóvenes investigadores para favorecerse en las evaluaciones, etc.

¹⁶ A las mismas conclusiones decepcionantes sobre el JCR llega el informe *Observacions al document "Mètodes d'avaluació de la recerca a la UB"*, Comissió Permanent de Recerca de la Facultat de Dret, Barcelona, 20/10/2004, p. 5.

editorial que publica²¹ ni la revista que acoge la publicación²², ni el índice de impacto ni la indexación, puede suplantar la valoración sustantiva de un artículo ni de cualquier trabajo que se pretenda científico. Todos ellos son aspectos externos y no cabe automatización de la valoración. Nada puede sustituir a la lectura directa del trabajo.

Los índices bibliométricos para la calificación de la revistas son indicadores cuantitativos que nunca debieran *a priori* predeterminar la calidad de un artículo²³. Tampoco los indicadores cualitativos (como comités de expertos) deben ser definitivos, aunque debería ser imprescindible utilizar ese criterio tras las mediciones bibliométricas para que estas tengan *fiabilidad relativa*. El indicador cuantitativo relevante es INRECJ²⁴ y se puede decir que casi el único; el ranking “RESH” (*Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas*) también se refería a datos bibliométricos basado en citas²⁵ pero se detuvo en 2004. Por el contrario un antiguo listado del CINDOC se basaba en encuestas muy amplias entre profesores, pero se observaba en las respuestas que éstas acusaban un notable “ajuste de cuentas” entre las *tribus*: castigo a revistas ligadas a otras áreas o en las que no han publicado. El indicador cualitativo no puede ser asambleario sino suministrado por comités de notables o de las asociaciones académicas²⁶.

²¹ Las editoriales publican monografías y obras colectivas de toda laya previo pago de una cantidad o en función de las expectativas de ventas, lo que distorsiona el calificativo de *editorial de prestigio*. La gran mayoría de los proyectos de investigación incluyen partidas para subvencionar la publicación. Dadas las facilidades para publicar hoy en día, no es un mérito o ventaja comparativa ni debe ser determinante de una valoración ni gozar de presunción de calidad del contenido las llamadas “editoriales de prestigio”.

²² Aunque ahora casi todas las revistas jurídicas incluyen normas de valoración de los originales, todavía no son “auténticas” sino meras formalidades de cara a los requisitos exigidos por FECYT.

El estar indexadas las revistas jurídicas no transforma la calidad de las mismas. Las decenas de requisitos que exigen son meras formalidades que no afectan a los procesos de calidad. Los colegas revisores tampoco ayudan y sus informes positivos abundan (no hay que motivar, apenas) y evitan los negativos que obligarían a leer los originales y razonar objetiva y científicamente. Muchos directores encargan trabajos y los correspondientes informes son de circunstancias. Y rara es la revista que informa del número de trabajos aceptados y rechazados; antes de no poder salir se publica lo que llegue... Hay revistas, especialmente las electrónicas, que publican varias decenas de trabajos en cada número lo que revela que publican cuanto les llega sin control real. En estos casos el control bibliométrico es indiciario: si nadie los cita, la revista es deleznable. Hay muchas así...

²³ En el mismo sentido: “En altres paraules, l’avaluació de la recerca, seguint criteris exclusivament formals i quantitius, entenem que pot esbiaixada i errònia”, en *Observacions al document “Mètodes d’avaluació de la recerca a la UB”*, Comissió Permanent de Recerca de la Facultat de Dret, Barcelona, 20/10/2004, p. 6.

²⁴ El ranking “INRECJ” que realiza el Grupo de Investigación EC3 Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de la Universidad de Granada (<http://ec3.ugr.es/in-recj/>) es de cierta importancia para introducir en el mundo del Derecho los indicadores cuantitativos. Sin embargo, INRECJ adolece de un filtrado cualitativo y hay muchas disfunciones en sus resultados atribuyendo calidad a revistas divulgativas por tener una asidua periodicidad o contabilizando las citas a los editores o coordinadores de obras colectivas que acompañan las variadas contribuciones de una obra.

²⁵ <http://resh.cindoc.csic.es/>. También se establece un ranking en *European Reference Index for the Humanities (ERIH)*; clasificación de las revistas en categorías A,B,C,D. <http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html>.

²⁶ Un encomiable ejercicio de valoración fue el realizado por notables profesores de Derecho Civil en junio de 2008 señalando de forma consensuada las revistas que les merecían un juicio positivo como “indicio de suficiencia investigadora”. En un proyecto de investigación financiado por el ministerio también se hizo una aproximación a la valoración de las revistas de Derecho Civil.

Los criterios bibliométricos y los rankings son importantes y necesarios para no dispersar la difusión científica en revistas de baja calidad. Ahora bien, los indicadores cuantitativos y cualitativos de las revistas nunca debieran ser una excusa para no examinar el contenido de una publicación, ya sea para reconocer un sexenio, ya sea para valorar los resultados de un proyecto de investigación financiado, ya sea para las acreditaciones. Pero no nos engañemos, raramente se leen los trabajos presentados al completo o al menos de forma selectiva. Algunos presidentes de los comités asesores de la CNEAI lo han logrado de *una parte* de sus miembros, pero esas buenas prácticas no se han mantenido y dependen más del sentido de la responsabilidad de sus componentes.

Los criterios bibliométricos deben ser indicadores *complementarios* en el campo del Derecho para confirmar la calidad o su ausencia²⁷, pero no para suplantar la lectura total o de una parte significativa del mismo o, al menos, su examen de conjunto (en “diagonal”...).

Los criterios bibliométricos y las indexaciones no identifican la calidad de una publicación concreta sino el proceso editorial. Por ello ANECA no debería valorar con tales criterios la obra del candidato a una plaza de profesor.

La evaluación indiciaria consagra la grafomanía. Tesis y publicaciones se han convertido en refritos para ritos de paso cuyo fin es la promoción en ANECA. Se publica y se república lo mismo durante años. O se hace pasar como monografía de investigación compilaciones de textos y se publican con la complicidad de editoriales jurídicas. Se utilizan títulos neutros como “el principio de prohibición del uso de la fuerza” o “Tratado de Lisboa” o “La Carta de los Derechos fundamentales”, y salvo unas decenas de páginas de introducción el grueso es una compilación de normas. Pero se hacen pasar como monografías de autoría indetectables con los sistemas indiciarios de evaluación y, además, sin especialistas (los supuestos “expertos” de ANECA casi nunca lo son de la especialidad).

Lamentablemente, el examen por indicios está fomentando la picaresca masiva (publicación de un mismo trabajo varias veces *tuneado* con títulos distintos y en lugares diversos) dado que en la ANECA y agencias autonómicas el examen es indiciario. Si en la CNEAI se abandona la práctica de examinar selectivamente los trabajos y comparar con su *curriculum* anterior, la repetición de contribuciones centrifugadas o tuneadas de períodos anteriores será lo habitual dañando definitivamente al sistema. Al no echar un vistazo al *curriculum vitae*, puede que se otorgue un sexenio con publicaciones que sean meras variaciones sobre publicaciones de tramos anteriores.

Y la normativa de sexenios y el sentido del rigor científico descartan como investigación las “reiteraciones de trabajos previos”; sin embargo, resultan muy rentables para las acreditaciones de ANECA y “anequitas” regionales y para presentar los informes de resultados en los proyectos financiados por ANEP. El trabajo

²⁷ Como señala J. H. H. WEILER “Indeed, the very ease of self-publication coupled with the notorious indeterminacy of scholarly ‘quality’ in legal writing –much more akin to ‘art’ than to ‘science’– valorizes even more publication legitimated by external referents of ‘quality’” (loc. cit. p. 507).



bien hecho ya no sirve para obtener una plaza de profesor o un proyecto.

En todo caso, la introducción de los índices de impacto para valorar la investigación jurídica debería hacer cambiar la política y procesos editoriales de nuestras revistas de modo que se ponga fin a esos ridículos consejos científicos y de redacción que cubren todo el escalafón y se separe la dirección y un restringido consejo científico de los revisores de los trabajos. Hay que desterrar el compadreo del pasado así como las revistas elitistas o privativas de tribus o caciques. Claro que tampoco la actuación opuesta de las nuevas revistas electrónicas o convencionales que publican cuanto les llega con tal de ser los primeros en ofrecer la *fast food*²⁸. Una buena revista es la que ni tan siquiera publica lo bueno sino lo *mejor*. Cuando una revista se permite rechazar artículos “aceptables” para otras y solo publica lo mejor en cada número, ha entrado en el círculo del prestigio editorial. Sólo así puede subir su factor de impacto, generará interés y favorecerá que le lleguen los mejores trabajos y no se disperse la difusión de los buenos trabajos.

Pero si el equipo de dirección se deja llevar por el nombre del autor, o de la sombra que le cobija, del amiguismo o criterios grupales entonces es una revista sin prestigio y decaerá pues los índices de impacto –con sus imperfecciones, ya lo he dicho– las marginarán del sistema...

IX. PROYECTOS O/Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Hasta ahora en el sistema de evaluación de proyectos y de la investigación se ha dado más importancia al proyecto que a los resultados. Afortunadamente, algo parece que empieza a cambiar. El Ministerio y la ANEP deben enviar mensajes de seriedad y de evaluación más estricta a evaluadores y evaluados.

En las ciencias jurídicas, como en otros campos de los que no son ajenos las experimentales, se tiene la convicción de que esos fondos *no* son para investigación o creación de conocimiento, sino la forma sobreentendida, con justicia “distributiva” o café para todos, de financiarse las áreas (su material fungible e infor-

mático, bibliografía y publicaciones periódicas, algún que otro viaje a congresos...). Los evaluadores respetan el pacto implícito de *impunidad* y evalúan favorablemente la inmensa mayoría de los proyectos.

Por ello el problema de fondo de ANEP, de sus falsos grupos y sus falsos proyectos, es la política ministerial y autonómica de no financiar directamente las bibliotecas y los departamentos (equipamientos, monografías y publicaciones periódicas) y todo “el mundo” tiene que recurrir a los proyectos para pagar gastos elementales haciendo trampas consentidas con la burbuja de los proyectos y multiplicando exponencialmente el gasto y el despilfarro de dinero público.

A lo anterior, se añade la oleada de proyectos porque como hay que ser IP para la promoción a Cátedras en la ANECA o para que descuenten horas en la docencia o para optar a los tramos autonómicos... El sistema se retroalimenta con sus propias perversiones. Mientras la ANECA exija *de facto* para la promoción estar en muchos proyectos o ser IP en proyectos, el daño a la ANEP y sistemas autonómicos de evaluación de proyectos será inmenso.

La inmensa mayoría de los proyectos que se presentan son una pura apariencia con temas irrelevantes o trillados; también hay colegas que viven del mismo tema, convenientemente estirado, proyecto tras proyecto. Ponen al día y “republican” bajo la apariencia de la continuidad de la línea investigadora. La mayoría de los proyectos no producen resultados o investigaciones nuevas y todos recurrimos al truco de poner una nota al pie de toda publicación del período relacionándola con el proyecto en vigor. Al no querer cambiar el modo de financiación de los Departamentos y Áreas los males son sistémicos.

También las plantillas de evaluación que suministra ANEP no son inocuas y han inducido a engaño al ser aplicadas a ciencias jurídicas. Piden que se valore (positivamente) que se haya trabajado ya en la materia en cuestión, lo que puede ser necesario en Ciencias experimentales para evitar que se reinvente la rueda y fomentar que se vaya más allá. Pero es un arma de doble filo en nuestro campo. Lleva a proyectos fáciles pues los miembros del grupo endosan los trabajos que ya tienen tras el consiguiente tuneado o centrifugado. Los proyectos se repiten y se mantienen durante años y basta con el consiguiente refrito de la anterior investigación. En bastantes casos he podido demostrar que el IP y varios miembros del grupo ya tenían archiinvestigado el tema a tratar; el resultado de la investigación es que han publicado

²⁸ Como dice Weyler, refiriéndose a la facilidad de autoedición de las ciberrevistas que publican todo sin límite, producen saturación y quien se acostumbra a la *fast food* no sabe apreciar la buena cocina hecha con esmero y a fuego lento (loc. cit., p. 508).

por enésima vez el mismo trabajo (lo he podido demostrar con listados de varias decenas de publicaciones que son “variaciones sobre el mismo tema”, ya sea la delimitación de competencias y el principio de subsidiariedad, los derechos fundamentales, etc.). Es grave republicar, pero además es una malversación de fondos públicos cuando lo republicado se incluye como resultado de un proyecto de investigación. Después de algunos años de observación y experiencia de nuestro entorno he llegado a la conclusión de que en la Universidad española abundan los “(re) publicanos”... pero de los malos...

No basta que el Ministerio enuncie listas de priorizaciones de materias; no deben admitirse los proyectos por el mero hecho de encajar en la materia genérica sino en perfiles y enfoques muy concretos que permitan profundizar y avanzar en el conocimiento y en las respuestas a dar a los problemas de la sociedad y el Estado. En el caso de un proyecto de investigación, lo que importa es contextualizar la investigación y definir sus objetivos, señalando cuál es la novedad de la propuesta y, sobre todo, cómo se va a enfocar la solución al problema. Apenas hay proyectos con enfoque científico, casi todos desconocen en qué consiste una metodología, muchos denotan la ausencia de una preparación previa y el desconocimiento absoluto del tema y de sus antecedentes. Se percibe en numerosos proyectos la incapacidad para intentar una aportación original... No deben admitirse proyectos generalistas que abundan en lo conocido. Decía Ramón y Cajal “Asegurémonos, pues, merced a la investigación bibliográfica cuidadosa, de la originalidad del hecho o idea que deseamos exponer”²⁹.

Salvo casos muy, muy circunstanciados, no se precisan cientos de miles de euros para hacer una investigación en Derecho. Con muy pocos miles de euros se mantiene un Área. Pero parece que un proyecto no es serio si no se acerca o supera los cien mil euros. Sin embargo, una buena parte de los materiales que dicen necesitar son fondos existentes en la Universidad (Internet iguala a viejas y nueva Facultades). La mayoría de las Facultades tienen una biblioteca aceptable con nutridos fondos físicos y suscripciones a bases de datos, los documentos legales y jurisprudenciales son accesibles en internet, algunas revistas son electrónicas o sus fondos digitalizados gratuitos, etc. El evaluador debe percibir un *humo* de malversación de fondos públicos en aquellos proyectos jurídicos que sobrepasen ciertas cantidades dinerarias y los justifiquen con supuestas suscripciones a

bases de datos, personal para “ordenar” los materiales, visitas a bibliotecas o instituciones para consultar sus normas, sentencias (hoy todo accesible en Internet), etc.

El capítulo de viajes es otro indicador de la proyectada estafa: como observaba desolado un evaluador de proyectos de Economía, algunos grupos proyectaban destinos muy variados y que no se repetía: un primer viaje a Estados Unidos, y conocido este país, después querían investigar en Australia, Nueva Zelanda, India, Canadá... Una evaluadora arqueóloga estaba contrariada porque raro era el proyecto para investigar en España, mientras que todos los proyectos arqueológicos eran para exóticos viajes a Fidji, la Patagonia, India, Uzbekistán, Mozambique, Perú, etc.

Finalmente, en materia de proyectos lo importante no es la adjudicación; no debería ser un mérito tener proyectos. Lo que hay que valorar y medir son los resultados, *no las actuaciones que presuntamente nos llevan a ellos*. Lo que importa son las publicaciones de cada uno de los miembros del grupo. Con frecuencia, varios miembros del grupo no publican nada ni han colaborado en nada y, sin embargo, les cuenta el mérito de haber formado parte del grupo y les puntúa para el tramo autonómico o para la acreditación. Por ello, ser miembro o IP de un proyecto nunca debiera ser mérito ni para la ANECA ni las agencias regionales de evaluación ni en el marco interno de las universidades. No miden la investigación.

Igualmente cuando se presentan los trabajos publicados, resultados de un proyecto de investigación, la lectura del mismo permite juzgar si hubo aportación o si por el contrario era un mero acarreo de materiales (doctrinales, normativos, jurisprudenciales) o sin más presentaba como investigación un centrifugado o una copia adaptada de publicaciones de períodos anteriores.

X. EVALUADORES Y EVALUADOS

También es preocupante el método de evaluación de los proyectos, tanto en ANEP como en la definitiva fase de asignación en el Ministerio de ciencia e investigación. Además, los evaluados son evaluadores de otros proyectos y viceversa. En la fase final de adjudicación por el Ministerio, en la comisión formada por una veintena de personas, he asistido a situaciones en las que al menos un tercio de los decisores eran simultáneamente evaluados en la misma sesión, incluso, en algún caso, el gestor de proyecto también tenía su proyecto que había asignado a evaluadores miembros de la comisión que también tenían el suyo. Esta ver-

²⁹ “Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la voluntad”.



gonzosa práctica debe desaparecer. No se puede ser evaluador y evaluado al mismo tiempo. La ANEP y el propio Ministerio, en la fase final de adjudicación, debe separar por completo a evaluadores y evaluados.

XI. COAUTORÍAS Y GRUPOS INVESTIGADORES EN EL CAMPO DEL DERECHO

El grupo investigador es un concepto e instrumento importado de las ciencias experimentales. Las plantillas de profesores en las ciencias “humanas” vienen determinadas por la actividad docente y no por la actividad investigadora. Los grupos investigadores, en especial en las Facultades de Derecho, es un concepto artificial y hablamos más de “escuelas”. El mismo concepto de Departamento no está interiorizado y es meramente administrativo. Lo que importa es el Área, la asignatura “troncal”. En todo caso, la noción de grupo es laxa y no condiciona la investigación. En nuestro campo se procura que dentro del “grupo” se trabajen sectores distintos del Área para tener diversificadas las especialidades dentro del común denominador de las materias troncales o de base.

La investigación jurídica es profundamente individualizada; se podrán ensamblar en una obra trabajos de varios profesores pero lo que se lee previamente, lo que se analiza, reflexiona y se vierte en la redacción final es una tarea individual. La citada OM de 1994 se refería a la investigación como “labor individual” para todos los campos. No es un impedimento para los grupos en la investigación, incluidas las ciencias experimentales, y se debería identificar quién ha hecho qué³⁰.

El sistema de evaluación de ANEP, que no diferencia los campos en sus plantillas, ha tenido consecuencias negativas en la formación de falsos grupos de investigación. Claro que, de nuevo, el sistema de evaluación de ANECA, importando resultados de las evaluaciones de ANEP, ha dañado a ambos: se forman grupos de conveniencia unidos para puntuar para ANECA. Se piden proyectos en los que participan 15, 20, 25 investigadores que figuran simultáneamente en dos, tres o más proyecto. Para ANEP la coartada es la “pluridisciplinariedad” y fomentar el trabajo en equipo, que será muy adecuado en las experimentales, pero en Derecho... Todo vale para puntuar en el apartado de proyectos³¹.

³⁰ Es sabido que toda publicación resultante de una tesis doctoral en ciencias experimentales conlleva la servidumbre de incorporar como autor al director. También por cada tema de trabajo que indican a sus colaboradores tienen derecho a figurar como coautores o si utilizan una máquina comprada con proyectos del investigador principal también tienen derecho a figurar como autores de las publicaciones que se basen en cálculos o resultados, por ejemplo, del espectrómetro de masas... Si se practicara ese derecho de pernada en el campo jurídico se multiplicarían los sexenios, las Cátedras y alcanzaríamos su nivel de éxito cuantitativo... aunque el autoengaño no es aceptable ni en las ciencias ni en las letras.

³¹ Igual ha sucedido con las tesis doctorales. En efecto, antes de existir ANECA, quien dirigía las tesis en el campo del Derecho habitualmente era el Catedrático. Un buen titular se reservaba y se potenciaba como investigador y docente, se concentraba en su formación cualitativa sin estar obsesionado por meter más puntos en su “hucha”... Igualmente, el titular formaba parte del equipo y participaba en los proyectos pero no era IP (investigador principal). Como ANECA reparte puntos por dirigir tesis y por ser IP, o por formar parte en proyectos, los grupos “de socorros mutuos” presentan proyectos a ANEP variopintos y masivos y los catedráticos se retraen de presentar proyectos.

Los proyectos financiados no solo han multiplicado la creación de muchos grupos ficticios o artificiales; lo grave es que han dañado la investigación de hondo y largo recorrido. En los campos jurídicos y humanidades, la mejor investigación es la individualizada o como mucho en doble coautoría y con frecuencia en monografías. No sé qué suerte tendría presentar a ANEP un proyecto por un solo investigador ni cómo se podría cumplimentar sus formularios pensados para grupos. Es una lástima que se hayan cerrado a cal y canto los cauces a la investigación individual tan rica en campos como la historia, la filosofía, las filologías o el derecho.

XII. ¿QUÉ ES INVESTIGAR EN DERECHO? ORIGINALIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Los mensajes del sistema de los sexenios a la comunidad de juristas no han llegado sino tardíamente, cuando el complemento académico fue más importante que el económico. El mensaje más traumático, aunque positivo, fue estimar que publicar no es investigar y que no es investigación las publicaciones meramente *descriptivas*, de mero traslado o noticia o crónica del contenido de normas o el mero acarreo de materiales doctrinales, legales y jurisprudenciales que tanto abundaban (y abundan aún) en nuestro campo. La costumbre habitual de las glosas de jurisprudencia o las crónicas legislativas y jurisprudenciales son sin duda formativas y deberían valorarse en ANECA, pero no son por lo general investigación, es decir, innovación del conocimiento. Son complementarias del currículo válido para deducir grado de conocimiento amplio, la capacidad de trabajo y seleccionar al profesorado, pero no para premiar o fomentar la investigación. Pero deslindar ese acarreo de materiales de la tarea de creación requiere la lectura, al menos selectiva, de la obra.

Se aceptará, con carácter general, que en un trabajo científico lo único que importa es la creatividad, el rigor, la metodología y la repercusión del trabajo. Investigar requiere pensar en aspectos nuevos, concretar objetos específicos para añadir análisis científico y la valoración personal, al tiempo que métodos nuevos para permitir aportar nuevas perspectivas y crear conocimiento. La mayoría estima que es repetir y en el mejor de los casos re-sistematizar lo que ya se conoce. El legislador de la Orden Ministerial de 1994 objetivó que *no* es investigación, cualquiera que sea su formato, los trabajos meramente descriptivos, las reiteraciones de trabajos previos, los libros de texto, la divulgación profesional, las recopilaciones legislativas, los comentarios de sentencias que sean una mera glosa, etc.

Precisamente el método que ha tratado de introducir la normativa de los sexenios ha sido establecer unos criterios sobre la valoración científica de las aportaciones jurídicas. Es bien sabido que los juristas analizamos hechos, normas jurídicas, informes, sentencias y tratamos de explicarlos desde conceptos generales. Explicarlos no es describirlos o rebotar el texto de la ley o de la sentencia. Los criterios de la O.M. de 1994 para todos los campos científicos son la “Contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad”, o ser “trabajos formalmente científicos o innovadores frente a los meramente descriptivos, simple aplicación de conocimientos”, así como la publicación



de “artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio”, trabajos “de público conocimiento”³² y “fruto de la labor personal” del solicitante.

Se publica sobre lo publicado y lo que hay que valorar en todos los estadios (CNEAI, ANECA, ANEP, agencias autonómicas) es lo que aporta de nuevo a la ciencia; si los revisores de revistas, de editoriales, de ANECA, etc. se centrarán en criterios científicos disminuiría el número desorbitado de publicaciones.

CNEAI y ANECA deberían hacer llegar la transcendencia de la calidad y no el número de publicaciones. Hoy los sistemas informáticos permiten producir textos con rapidez y de forma relajada³³; hay decenas de revistas en papel y digitales e inmensas facilidades para editar libros colectivos. Decía Ihering que “Cuanto más se aprende, más se advierte que no toda idea es idónea para ser publicada”³⁴; por desgracia, cuando un profesor de Derecho lee algo, quiere (re)publicarlo... Sin embargo, la mayoría de las publicaciones que se hacen (hacemos) son prescindibles.

En el campo del Derecho es muy importante la diversificación y estudiar la pluralidad de cuestiones que se plantean³⁵. Lo que se debe interrogar el evaluador, cuando es una nueva línea investigadora, es si los solicitantes han hecho un esfuerzo de conocimiento previo del contexto en un sector (si tiene formación sobre el sector base), no si ya han hecho investigación coincidente o similar. Si ya hay investigación similar se deberían descartar el proyecto para poder innovar y aportar a la ciencia.

Claro que no debemos caer en el error de que la diversificación sin más es incrementar la aportación investigadora. Uno de los males más habituales de la falsa política de apoyo a la investigación jurídica es presentar y aceptar proyectos sin novedad alguna motivados por una falsa diversificación. El grupo señala que quiere investigar en un ámbito nuevo (*nuevo para ellos*); bien, pero la clave es si la materia está ya amplia

y profundamente tratada por la comunidad académica nacional o extranjera... En el ámbito jurídico llegan innumerables proyectos abstractos y generalistas para “investigar” (ejemplos de mi ámbito) la responsabilidad de proteger, las operaciones de *pece-making*, las fuentes del Derecho de la Unión... o la delimitación de competencias, la jurisdicción comunitaria, o la inmigración, etc. y luego aparece un reparto de temas recurrente entre los miembros. Pretenden, en el mejor de los casos, formarse en determinadas materias. Pero una cosa es la legítima formación y especialización del profesorado, a ser posible diversificada y profunda, y otra muy distinta la investigación: añadir conocimiento al que ya existía. Si un profesor o un grupo quiere conocer el estado del derecho de propiedad intelectual en España o en Alemania, que haga un Master o lecturas ordenadas en la materia y tome sus notas y reestructure conocimientos para su personal especialización. Es muy loable llevar a cabo la diversificación y especialización de conocimientos pero eso no es investigar.

Muchas publicaciones en revistas y libros (monografías y libros colectivos) las hacemos pasar como investigación cuando son meras paráfrasis de las afirmaciones de otros (acarreo de doctrina, con frecuencia “amiga” o del Área para complacer a la tribu), documentos, normas y sentencias judiciales. Tanto en el ámbito del Derecho como de la Ciencia Política se hacen tesis y libros en los que solemniza la trivialidad, se describen sin más situaciones o procesos con mero acarreo de datos, discursos, o documentos sin interés que bien centrifugados dan para varios centenares de páginas. Para la investigación deberían ser rechazados de plano. Por desgracia, para la ANECA y agencias autonómicas la cantidad es el criterio decisivo de acreditación para titulares y catedráticos. Prima la cantidad, no importa los centrifugados y “tuneados” infinitos de un mismo trabajo... En definitiva, los sistemas de suficiencia indiciaria han desalentado el esfuerzo por la calidad. Don Federico de Castro, por no mencionar a otros maestros vivos, jamás hubiera llegado a ser Catedrático con el sistema de la ANECA ni hubiera tenido un sexenio.

Decía un científico norteamericano que la investigación con suficiente ambición debería intentar alzar las estructuras de un nuevo “edificio”; pero si no logramos esa meta, al menos tratar de contribuir al “diseño interno y la funcionalidad” del edificio. Sin embargo, la mayor parte de las publicaciones lo que hacen es poner algún que otro azulejo en edificios cuya estructura y diseño han hecho otros...

³² Descartables, pues, todos los dictámenes o informes técnicos, así como las investigaciones no publicadas.

³³ Dice WEILER, editor de una revista, hablando del aumento de artículos: “It is also the result of a more efficient ‘production process’ of writing an article. I cannot say that there has been an increase in quality. This is not hearkening back to the Good Ol’ Days – far from it. It is simply a claim about a low correlation between quantity and quality” (loc. cit., p. 507).

³⁴ Ob. cit., p. 126.

³⁵ En este sentido *Observacions al document “Mètodes d’avaluació de la recerca a la UB”*, cit., p. 4.

XIII. CONCLUSIONES

1. No hay mejor procedimiento de evaluación de la investigación en el campo del Derecho que la lectura directa de cada trabajo. Lectura total o, en todo caso, selectiva. Los formularios de los sexenios, los informes finales de los proyectos y la solicitud de acreditación deberían recomendar la entrega digitalizada de las publicaciones.
2. La utilización de criterios y métodos de evaluación propios de las ciencias experimentales presentan insuficiencias, distorsiones y graves perjuicios en las ciencias jurídicas.
3. La investigación jurídica, en todo país, es preferentemente nacional, individual y diversificada.
4. Las revistas jurídicas de calidad se dividen con valor igual en nacionales de prestigio internacional y extranjeras de prestigio internacional. *A contrario*, las revistas sin calidad científica pueden ser extranjeras o nacionales. Parece elemental, pero hay que aclararlo ante tanto papanatismo ministerial y rectoral.
5. La evaluación de la investigación jurídica de forma indiciaria y bibliométrica (editorial, revista, número de citas, etc.) es muy insuficiente para el campo del Derecho. Cada trabajo vale por su contenido y no por el continente o formato de publicación.
6. Los criterios bibliométricos (cuantitativos) están aún insuficientemente desarrollados en el campo del Derecho. No pueden

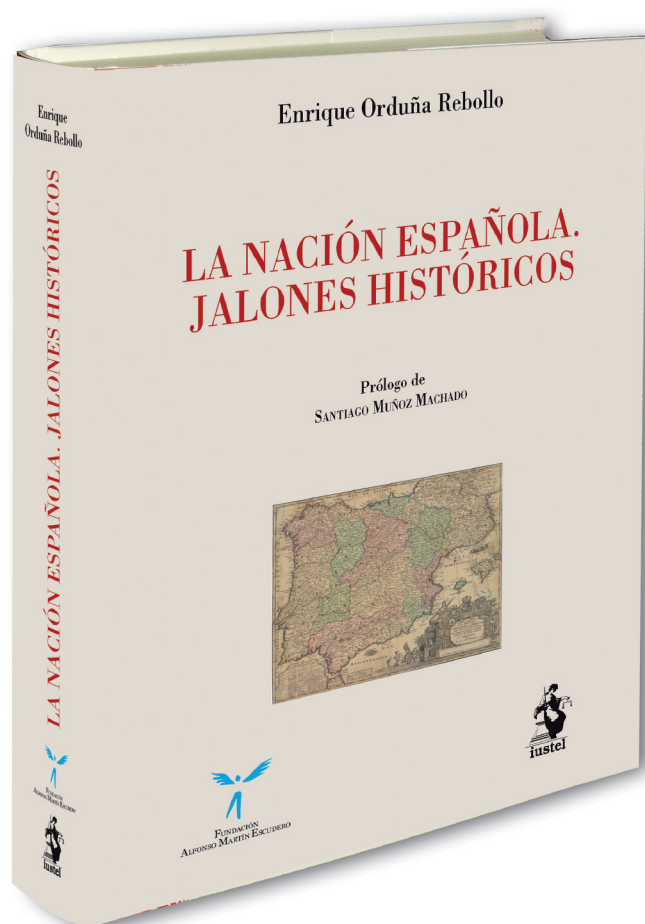
ser relevantes sin la ponderación de calidad científica esencial de expertos cualificados. En todo caso, los indicios y criterios bibliométricos, tamizados por criterios cualitativos, sólo deber ser tenidos en cuenta a título complementario y para evitar la dispersión de la investigación científica.

7. La ANEP debería facilitar en el campo del Derecho la investigación individualizada o de pequeños grupos y potenciarla frente a los grupos artificiales.

8. La ANEP debería potenciar la diversificación de la investigación jurídica y su alta especialización descartando los proyectos meramente formativos o repetitivos. A su vez, la ANEP y el propio Ministerio en la fase final decisoria deben separar por completo a evaluadores y evaluados.

9. La ANECA no debe utilizar los sexenios para la selección de profesorado. A lo sumo pueden ser un indicio a valorar por las Comisiones de acreditación tras el examen cualitativo de la investigación presentada. ANECA debe cambiar su método de evaluación basados en (in)expertos y transmitir a la comunidad académica que la valoración positiva prefiere pocas publicaciones de gran trascendencia a muchas inútiles.

10. La ANECA no debe puntuar por el hecho de formar parte de proyectos financiados ni por ser IP, sino por los resultados obtenidos en el avance del conocimiento a través de las publicaciones valoradas por su contenidos. ♦



LA NACIÓN ESPAÑOLA. JALONES HISTÓRICOS

ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO

ISBN: 978-84-9890-164-1
(2011) 760 páginas. 59,00 euros (con IVA)

El eje central de este trabajo es la Nación Española, sobre la que ha girado todo el proceso de elaboración del mismo. Es una realidad la existencia del concepto Hispania, España, Espanya, desde la Edad Media, enfatizado por cronistas y reyes, que lamentaban la pérdida de España en 711, que desde las más variadas posiciones políticas, a lo largo de la Edad Media, trataban de reconstruir la España cristiana. Fue el devenir de los cinco reinos que en los albores de la Edad Moderna coincidieron en el marco de la Monarquía Hispánica.

Para entonces el concepto de Nación referido a dicha figura política, era algo más que una simple entelequia, soportada por una lengua, dotada de fuerza esplendorosa, cuya expansión y desarrollo no se ha detenido hasta el siglo XXI.



Para más información www.iustel.com